Bogotá D.C., 05 de mayo de 2020

Brigadier General

**NORBERTO MUJICA JAIME**

Director General INPEC

**ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDADES POR PERJUICIO A LA SALUD PÚBLICA, POR TRASLADO DE PPL CONTAGIADOS CON COVID-19**

Cordial saludo,

De manera atenta nos dirigimos a usted con el fin de solicitar que nos informe que acciones, investigaciones, y/o determinaciones ha realizado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, con relación a la afectación a la salud pública, por el traslado de los privados de la libertad del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio, hacia los Establecimientos de Florencia, Yopal, Ibagué, Guaduas y Bogotá.

Lo anterior, porque es evidente el perjuicio causado a la salud pública, y el riesgo en el que se ha puesto la salud y la vida de los funcionarios, sus familias, y las personas privadas de la libertad de los lugares de destino, a donde llegaron los PPL contagiados de COVID-19.

Han pasado varios días, incluso semanas, desde que la opinión publica conoció las consecuencias de la decisión de trasladar PPL en el marco de la pandemia, y a la fecha no se conoce ninguna responsabilidad por estos hechos, somos respetuosos del debido proceso, pero lamentamos que se vaya a presentar impunidad en la que no se ha realizado al parecer gestión por parte de la oficina de Control Único Disciplinario del INPEC.

**DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS**

El marco del régimen de responsabilidad patrimonial del Estadodel artículo 90 en cuestión *“le impone a aquel* [al Estado]*el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, es decir que el elemento fundamental de la responsabilidad es la existencia de un daño que la persona no está en el deber legal de soportar. Se observa entonces que no importa si el actuar de la Administración fue legal o no, para efectos de determinar la responsabilidad, puesto que la antijuridicidad no se predica de su comportamiento sino del daño sufrido por el afectado, que bien puede provenir de una actuación legítima de aquella; no obstante, la jurisprudencia continúa aplicando los regímenes de imputación de responsabilidad que de tiempo atrás ha ido decantando, ya que ellos facilitan el proceso de calificación de la conducta estatal y la determinación de la existencia del daño y del nexo causal de éste con aquella. El principal régimen de imputación de responsabilidad es el de la tradicional falla del servicio, dentro del cual la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: 1) el daño antijurídico sufrido por el interesado, 2) la falla del servicio propiamente dicha, que consiste en el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, 3) una relación de causalidad entre estos dos elementos, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio”****[[20]](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-908-13.htm#_ftn20)****.*

Son pues, la actuación del Estado y la configuración de un daño los que encuadran la responsabilidad patrimonial derivada de las acciones y omisiones de los servidores públicos. La jurisprudencia del Consejo de Estado, ha sostenido sobre el particular que “*el artículo 90 de la Carta de 1991 es también un eficaz catalizador de los****principios y valores que sirven de orientación política de nuestro Estado Social de Derecho****y que deben irradiar todo nuestro sistema jurídico, catálogo axiológico dentro del cual ocupa especial importancia la garantía de la libertad (preámbulo). Asimismo el artículo 90 sigue el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y liberal, que no puede ser otro que****la eficacia general de los derechos fundamentales****, los cuales vinculan a todas las manifestaciones del poder público, como enseña Locke y proclama en forma contundente la Carta Política al disponer que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5 eiusdem). En tales condiciones frente a cualquier****daño antijurídico****imputable a una autoridad pública con ocasión del ejercicio de uno de los llamados****derechos de libertad,****el Estado deberá responder patrimonialmente, no sólo porque así se infiere de una lectura insular del artículo 90 Constitucional, sino además porque se desprende de una lectura sistemática de la Carta”****[[21]](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-908-13.htm#_ftn21)****.*

18.- En relación con esto, la sentencia C-644 de 2011 concluyó que la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro sistema jurídico encuentra fundamento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, desarrollado *in extenso* por la jurisprudencia y expresamente consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual a su vez debe interpretarse en concordancia con los artículos 2°,13, 58 y 83 del mismo ordenamiento superior que, por un lado, le impone a las autoridades de la República el deber de proteger a todas las personas en Colombia en su vida, honra y bienes.

Por su parte el Artículo 6 de la Constitución Nacional establece; Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la **Constitución** y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Jurisprudencialmente se ha establecido que;

*El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha decidido que el concepto de la responsabilidad administrativa es aplicable a las consecuencias de actos u omisiones en la administración de Justicia, lo cual significa que cuando como resultado de actuaciones judiciales se deriven daños externos demostrables, el Estado debe responder pecuniariamente por la vía de la indemnización.*

*Se trata de una apreciación justificada, si bien puede abrir camino a un inagotable semillero de litigios contra el erario. Pero al margen de la misma convendría hacer similar consideración a la que se ha hecho respecto de las destituciones indebidas en el sector público, no pocas veces ocasionadas por intereses personales o políticos. Se ha dicho que en el reconocimiento y pago de los perjuicios se debe vincular, proporcionalmente, al funcionario superior responsable del acto acusado, sobre todo cuando se establece debidamente la voluntariedad. No ha de ser exclusiva la responsabilidad para el Estado como ente abstracto.*

En materia disciplinaria respecto a la acción u omisión del servidor público se ha dicho;

el artículo 23 de la Ley [734](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4589#0) de 2002, Código Único Disciplinario,establece:

***“ARTÍCULO 23.******LA FALTA DISCIPLINARIA****. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.”*(Subraya fuera de texto)

De acuerdo con la Constitución Política y la ley, los servidores públicos deben responder ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley, por la omisión en el ejercicio de sus funciones, el incumplimiento de sus deberes y por la extralimitación en las mismas.

Sobre el particular se ha pronunciado la Procuraduría Primera Delegada de la Vigilancia Administrativa dentro del proceso identificado con el No. Rad. 052-8046-04 en respuesta al recurso de apelación al fallo de primera instancia, el 11 de octubre de 2006, en los siguientes términos:

*“Al respecto es importante hacer algunas precisiones de orden jurídico:*

*El artículo 6 de la Carta Política prevé la cláusula general de responsabilidad de los ciudadanos y, la específica y excluyente de los servidores públicos, los cuales deben responder ante las autoridades por infringir la Constitución, la ley, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, norma que en consonancia con el artículo 122 ibídem, armoniza su contenido al determinar que no existirá cargo o empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y todo servidor público, deberá ejercer su cargo jurando cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.*

***Así las cosas, para determinar la responsabilidad de cualquier servidor público, es indispensable precisar el ámbito de sus deberes funcionales, de tal suerte que, se pueda establecer cuándo se está ante una omisión o una extralimitación.****“(El resaltado es nuestro).*

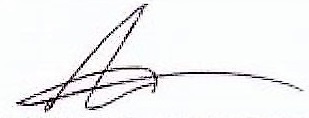
*Igualmente, esta misma Delegada dentro del proceso con Radicación: 013-132166-05, de fecha 19 de octubre de 2006, afirmo sobre la responsabilidad del funcionario público lo siguiente:*

*“En el cumplimiento de esos cometidos estatales y durante el ejercicio de las correspondientes funciones o cargos públicos, los servidores públicos no pueden distanciarse del objeto principal para el cual fueron instituidos, como es el de servir al Estado y a la comunidad en la forma establecida en la Constitución, la ley, y el reglamento; por lo tanto, pueden verse sometidos a una responsabilidad pública de índole disciplinaria, cuando en su desempeño vulneran el ordenamiento superior y legal vigente, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones ( arts. 6 y 123 CN)”.1” (Subraya fuera de texto)*

De acuerdo con lo señalado por la Procuraduría Delegada, la omisión de funciones de los servidores públicos puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria, en razón a que el cumplimiento de las funciones de un empleo deberá estar encaminados al servicio del Estado y la comunidad, por ello, debe revisarse las actuaciones de un servidor público en consonancia con las funciones detalladas en la ley o reglamento para cada caso.

Reiteramos que la Dirección Regional Central del **INPEC** ya requiere un relevo, que permita rectificar del autoritarismo a la acción dinámica de coordinación con respeto a los funcionarios.

Atentamente,

**WILSON HUGO AYALA PEREZ GUIOVANNI A. BENAVIDES MARTINEZ**

Presidente FECOSPEC Presidente Nacional UTC

Con copia:

**Presidencia de la República**

**Procurador General de la Nación**